



## **LA NECESIDAD DE FORMALIZAR LOS PROTOCOLOS DE ESTAMBUL Y MINNESOTA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: APLICACIONES Y USOS EN CASOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL**

Comisión: Preferentemente nueva Comisión Derechos Humanos. En su defecto  
Comisión de Derecho Penal.

Ponente: Ab. Juan José Velásquez T° XIII F° 243 Colegio de Abogados de Quilmes

Contacto: 1168957148 – [ojj.velasquez@gmail.com](mailto:ojj.velasquez@gmail.com)

# LA NECESIDAD DE FORMALIZAR LOS PROTOCOLOS DE ESTAMBUL Y MINNESOTA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: APLICACIONES Y USOS EN CASOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL

**Ab. Juan José Velásquez<sup>1</sup>**

**Sumario:** I. Introducción II. Hacia una definición de la violencia institucional: Origen histórico. Definiciones propuestas por la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio Público Fiscal. Ley 26.485 y la ampliación del concepto. III. Compromisos internacionales y la respuesta legislativa en Argentina. IV. Los protocolos: A) Protocolo de Minnesota. B) Protocolo de Estambul. V) Guías existentes. VI) Resolución 477/2023. VIII) Conclusiones.

## I. INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios, la historia democrática de nuestro país ha estado atravesada por diversas interrupciones. De todos los golpes de Estado que suspendieron de manera drástica nuestro orden democrático, ninguno fue tan violento como el ocurrido a partir de 1976 y que se extendió hasta el año 1983, donde la represión estatal alcanzó niveles devastadores, resultando en la eliminación de una parte importante de una generación. Con el retorno de la democracia, muchas de las prácticas represivas implementadas por

---

<sup>1</sup> Abogado **UBA**. Profesor de filosofía y teología. Docente en "*Elementos de Derecho Penal y de Procesal Penal*" en la cátedra del Profesor Titular Consulto Luis Fernando Niño, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Colaborador en "*Aspectos jurídicos de la violencia institucional*" en Facultad de Derecho-UBA. Asesor legal en Dirección Nacional de Protección a Personas Víctimas de Violencia Institucional, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ministerio de Justicia. Secretario de Comunicación **CAQ**. Coordinador de Comunicación Abogacía Joven e Iniciación Profesional **CAQ**.

las fuerzas armadas y de seguridad fueron abandonadas; sin embargo, otras persistieron, transformándose y enquistándose en nuestras Fuerzas Armadas, de Seguridad y cuerpos policiales democráticos. Este tipo de violencia, que realizó un pasaje desde una violencia particularmente política a una violencia eminentemente policial, comenzó recién a ser teorizada en la década de los 90. En el presente trabajo nos referiremos a ella como *violencia institucional*.

Delimitar lo que entendemos por violencia institucional será fundamental para poder abordar este fenómeno de manera efectiva. A nivel nacional y en diversas jurisdicciones, se han desarrollado grandes esfuerzos para prevenir e investigar crímenes como la tortura y las muertes bajo custodia, delitos que componen el acervo delictivo que tiene a las policías como sujeto activo. Las guías para la aplicación de los Protocolos de Estambul y Minnesota son ejemplos de dichos esfuerzos. No obstante, en la provincia de Buenos Aires aún no contamos con un marco formal que regule la implementación de estos protocolos, lo que limita nuestra capacidad de respuesta ante casos de violencia institucional.

Se torna imprescindible, entonces, contar con estas herramientas para garantizar una atención adecuada a las víctimas, una documentación exitosa para asegurar la rendición de cuentas por parte de las fuerzas de seguridad, y fortalecer el Estado de derecho. En esta ponencia, intentaremos delimitar la voz violencia institucional, exploraremos los puntos más importantes de ambos protocolos, sus aplicaciones y usos, y la necesidad de formalizar la adopción de ellos en la provincia de Buenos Aires, comparando con las guías ya existentes en otras jurisdicciones.

## II. HACIA UNA DEFINICIÓN DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia institucional? Si bien, como mencionábamos con anterioridad, este concepto fue tomando cada vez más relevancia en los últimos años, debemos reconocer su surgimiento con el advenimiento de la democracia y como modo de denuncia a prácticas enquistadas en las fuerzas policiales, prácticas que tuvieron origen en los años más oscuros de nuestro país, donde las libertades y derechos fundamentales se encontraban suspendidos. Dichas prácticas devinieron en prácticas residuales o resacasas que quedaron en el sustrato del quehacer policial. El "gatillo fácil" surge en los años 80 como un grito de familiares en denuncia de las ejecuciones extrajudiciales que comenzaban a padecer jóvenes oriundos de barrios populares en esta incipiente democracia. Así las cosas, al igual que Tiscornia (2016), podemos afirmar que lo que tuvo su origen en el territorio, en los barrios populares de nuestro país, luego fue tomado por la academia con el objetivo de desarrollar y profundizar sus implicancias. Afirma la autora que “... no es posible obviar que fue la militancia, o como lo llamamos ahora, el activismo legal de los Derechos Humanos, en alianza con grupos y colectivos de demanda de justicia, quienes fueron inscribiendo esa forma de violencia del Estado como un tema de Derechos Humanos” y agrega “La cuestión en aquellos años ’80 era cómo conceptualizar un tipo de prácticas policiales violentas que no eran represión política y que ocurrían en democracia.”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> **Tiscornia, S.** (2022). La violencia institucional como tema de trabajo e investigación. En Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (Ed.), *Repertorios: perspectivas y debate en clave de Derechos Humanos: 2- violencia institucional* (pp. 10). Buenos Aires, Argentina: Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Si bien actualmente no contamos con una descripción que sea aceptada por la totalidad de la academia, podemos traer aquí la que expuso la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en su manual «Los derechos humanos frente a la violencia institucional», donde define a la Violencia Institucional como “prácticas estructurales de violaciones de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad”.<sup>3</sup> Podríamos entender, en un concepto más cerrado, que Violencia Institucional son aquellas prácticas enquistadas en diversas fuerzas como resaca de lo que fue el terrorismo de Estado, pero desarrolladas en un Estado de Derecho. A dicha definición podemos adesar alguna desarrollada por las Ciencias Sociales, como por ejemplo aquella que sostiene que la violencia institucional son “Costumbres institucionales, formas de hacer repetidas y sistemáticas de las fuerzas de seguridad, y argumentos eventuales contruidos como razones de estado (esto es, la violencia como efecto colateral de la seguridad) fueron cifrando las formas de la violencia estatal cuyo corazón o núcleo duro estaba constituido por la violencia policial -y también por las violencias del mundo penitenciario-. Por lo demás unas y otras prácticas arbitrarias, tanto las más como las menos violentas, se revelaban articuladas a la administración y gestión de poblaciones, a la regulación de mercados ilegales”<sup>4</sup>

Sin embargo, las definiciones existentes no se agotan con las ya expuestas; en nuestro ordenamiento interno nos encontramos con un abanico de ellas. A lo descripto

---

<sup>3</sup> **Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.** (s.f.). Los derechos humanos frente a la violencia institucional. Buenos Aires, Argentina: Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Recuperado de [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual\\_ddhh.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_ddhh.pdf)

<sup>4</sup> **Ministerio Público Fiscal de la Nación.** (2013). Resolución PGN 455/13. Buenos Aires, Argentina: Procuración General de la Nación. Recuperado de <https://www.mpf.gob.ar>

por las Ciencias Sociales y por la Secretaría de Derechos Humanos, podemos sumarle la elaborada por el Ministerio Público Fiscal en su PGN 455/13, donde afirma que “*se considera que las torturas, las condiciones inhumanas de detención, prácticas atentatorias de la libertad y el uso abusivo o ilícito del poder coercitivo estatal, consumadas por agentes estatales principalmente pertenecientes a las fuerzas de seguridad y penitenciaria, son constitutivas de la violencia institucional. Estas prácticas comúnmente se producen durante la privación de la libertad o durante otras intervenciones de agentes estatales en espacios públicos.*”<sup>5</sup> Por su parte, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad describe en FG 33/21 que “*...toda práctica, acto y/u omisión llevada a cabo por una o más personas que ejercen la función pública en un órgano, ente o institución pública, que resulte lesiva para la libertad, la integridad, la dignidad y/o la vida de una o más personas que se encuentran en contextos de restricción de su autonomía y/o libertad.*”<sup>6</sup> Podemos reseñar que son elementos comunes en estas definiciones el funcionario público como sujeto activo, una conducta violatoria de los DDHH siendo lesivas para la libertad y la dignidad de la persona, todas en un contexto de restricción de libertad ambulatoria. Sin embargo, en el año 2009 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Protección Integral a las Mujeres N° 26.485 B.O. del 01/04/2009, Art. 6, la cual opta por un concepto amplio de violencia institucional definiéndola como aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan

---

<sup>5</sup> **Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.** (2021). Resolución FG 33/21. Buenos Aires, Argentina: Procuración General de la Nación. Recuperado de <https://www.fiscalias.gob.ar>

<sup>6</sup> **PITA, MARÍA VICTORIA**, “Pensar la violencia institucional”, en Espacios de Crítica y Producción, (53), pp. 18, 2017. Disponible en <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/article/view/3757>

acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.

Por último, sería lícito preguntarnos si cualquier persona puede ser víctima o el sujeto pasivo en una relación de violencia institucional, y si bien al principio la respuesta podría ser afirmativa, tampoco podemos negar que existe una tendencia en la población a la que está dirigida: jóvenes morochos o marrones pertenecientes a barrios populares. Quizás en este sentido sea relevante destacar la importancia de la sentencia recaída en *Isassi, Gabriel Alejandro y otros s/homicidio agravado fuerzas seguridad art. 80 inc. 9, falsedad ideológica y privación ilegal libertad agravada art 142 inc 5*, donde el Tribunal Oral y Criminal N° 25 de la Capital Federal, además de aplicar tres prisiones perpetuas y condenas por los delitos de homicidio, encubrimiento y privación ilegítima de la libertad a los asesinos y encubridores del asesinato de Lucas González, también haya declarado al occiso y a sus amigos sobrevivientes como víctimas de violencia institucional en su parte resolutive. Además, el Tribunal agravó la pena por odio racial. Si bien hay sectores que cuestionan dicha decisión, sosteniendo que no sería racismo sino, en todo caso, una cuestión de clase, el Colectivo Identidad Marrón sostuvo en sus redes oportunamente que “La historia de Lucas es una de las miles de historias de chicos morochos marrones, indígenas que, a causa del perfilamiento racial, la violencia y el racismo institucional, son asesinados o violentados por las fuerzas de seguridad. Cuando vemos a la mayoría de las personas asesinadas por “gatillo fácil”, podemos encontrar el color de piel y los rasgos; el factor en común es el racismo. La

sentencia de Lucas González es una forma de reparación para la familia y la sociedad, porque su caso expone la violencia y el racismo que no debemos tolerar.”<sup>7</sup>

### **III. COMPROMISOS INTERNACIONALES Y LA RESPUESTA LEGISLATIVA EN ARGENTINA**

Dentro del abanico de delitos que pueden cometer aquellos funcionarios públicos en casos que eventualmente podrían ser tildados como casos de violencia institucional se encuentran la privación ilegítima de la libertad, severidades, vejaciones, apremios, torturas, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales. El Estado, en su esfuerzo por cumplir con las obligaciones internacionales, se ha visto en la necesidad de promulgar diversas normas para alinearse con los tratados firmados. Un ejemplo de esto es la incorporación del delito de imposición de torturas en el ordenamiento jurídico argentino, a través del artículo 144 ter del Código Penal. Este delito fue tipificado recién en 1958, pese a la abolición de la misma en la Asamblea General Constituyente de 1813. Pero no fue sino hasta 1984, con el regreso de la democracia, que las penas fueron significativamente aumentadas, equiparándolas con las del homicidio simple. Rafecas (2016) señala que hasta la sanción de la ley 14.616 en 1958, no existió una decisión política clara para penalizar la tortura, a pesar de que la Constitución Nacional y sus antecedentes, como el acta de la Asamblea General Constituyente de 1813, ya contenían disposiciones garantistas sobre la abolición de los tormentos.

---

<sup>7</sup> **Identidad Marrón.** (2023, 11 de julio). Condena por un asesinato por odio racial en Argentina. Instagram. [https://www.instagram.com/p/CuJJeQnOvOx/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/CuJJeQnOvOx/?img_index=1)



#### **IV. LOS PROTOCOLOS**

En el orden internacional, dentro de todos los esfuerzos para erradicar estos tipos de delitos, quisiera traer a colación el Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, Nueva York y Ginebra 1991) y el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (Protocolo de Estambul, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York y Ginebra 2000).

##### **A) Protocolo de Minnesota**

El primero, al que se lo suele llamar Protocolo de Minnesota y que fue elaborado con la asistencia de profesionales de diversas áreas, tiene como objetivo salvaguardar el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a la reparación, garantizando que se investiguen de manera eficaz todas las muertes potencialmente ilícitas o las desapariciones forzadas. Este protocolo establece un estándar común para investigar estos casos, ofreciendo principios y directrices tanto a los Estados como a las instituciones y personas involucradas. Se aplica a la investigación de cualquier muerte sospechosa que involucre actos u omisiones del Estado, como aquellas causadas por fuerzas de seguridad o bajo custodia estatal, o cuando el Estado no protege adecuadamente la vida. Además, exige que se investigue toda muerte en circunstancias sospechosas, incluso si no hay evidencia directa de la participación del Estado.

Dentro de los Elementos y Principios de las investigaciones propuestos por este protocolo, se solicita que dichas investigaciones sean prontas; efectivas y exhaustivas; independientes e imparciales y transparentes. En lo relativo a la independencia e imparcialidad, se establece que en las investigaciones de cualquier muerte potencialmente ilícita o desaparición forzada, los investigadores y los mecanismos de investigación deben ser independientes de influencias indebidas. Esta independencia debe ser institucional y formal en todas las etapas. Es decir, estas deben ser independientes de los presuntos culpables y de las instituciones u organismos a los que pertenezcan los posibles autores del crimen. Las indagaciones sobre homicidios supuestamente vinculados a integrantes de las fuerzas de seguridad deben realizarse sin interferencias inapropiadas que provengan de las jerarquías institucionales y las cadenas de mando.

Asimismo, el protocolo ofrece unas directrices detalladas sobre la investigación de la escena del delito, en cuanto a la documentación (fotografía, mediciones, notas), resguardo de escena (limitar el acceso, seguridad personal, seguridad de las pruebas) y fotografía (generales, a distancia media, primer plano). Se suman las directrices detalladas sobre entrevistas y excavaciones de fosa. En cuanto a las correspondientes directrices sobre la operación de autopsia, el examen externo establece que el cuerpo cadavérico deberá ser fotografiado vestido y completo antes de iniciar, con las manos hisopadas en búsqueda de residuos de pólvora. Luego, se deben retirar las prendas sin dañarlas y colocarlas sobre una sábana. Todo debe examinarse, describirse, registrarse, etiquetarse, fotografiarse y resguardarse por separado. El examen interno deberá fotografiar las manifestaciones internas de las lesiones y cualquier anomalía que se detecte. Se recomienda tomar fotografía de cada órgano por separado y sus superficies

de corte. Previos a la extracción, se tomarán muestras de los fluidos. Hay que recordar que deben fotografiarse las manifestaciones internas de lesiones y demás anomalías que se detecten. Lo ideal sería fotografiar todos los órganos y sus superficies de corte. Antes de extraer los órganos, hay que obtener muestras de fluidos (sangre, orina, bilis). El examen deberá ser sistémico, por regiones (aparato cardiovascular, aparato respiratorio, sistema biliar, aparato digestivo, sistema reticuloendotelial, aparato genitourinario, sistema endocrino, aparato locomotor y sistema nervioso central). Se registrará peso, tamaño y color de cada órgano, tomando nota de cualquier anomalía. Examinación completa de tórax y abdomen (registrando grasa subcutánea). Dichos ejemplos son solo a modo de graficar lo extenuante del protocolo; se sugiere remitirse a él para mayor profundidad.

Al finalizar, el Protocolo de Minnesota indica cómo deberá redactarse el informe final, la determinación de la causa de muerte (si es posible). Dicho informe deberá ser lo suficientemente exhaustivo como para que cualquier otro médico pueda llegar también a sus propias conclusiones sin la necesidad de volver a examinar los restos.

## **B) Protocolo de Estambul**

Como el nombre completo del manual lo indica, se sugiere utilizar el Protocolo de Estambul para investigar y documentar la tortura o penas crueles, inhumanas o degradantes, siendo su objetivo aclarar los hechos en relación con presuntos casos de tortura con miras a identificar a los responsables de los hechos y facilitar su procesamiento o a utilizar la información en el contexto de otros procedimientos dirigidos a obtener reparación para las víctimas. Para lograr dicho objetivo, será preciso que las personas encargadas de la investigación puedan, por lo menos, tratar de obtener

declaraciones de las víctimas de la presunta tortura; recuperar y preservar las pruebas, incluidas pruebas médicas, en relación con las presuntas torturas para ayudar en el eventual procesamiento de los responsables; identificar a posibles testigos y obtener sus declaraciones con respecto a la presunta tortura; y determinar cómo, cuándo y dónde se han producido los presuntos hechos de tortura, así como cualquier tipo de pauta o práctica que pueda haber dado lugar a la tortura. Entre sus principios se encuentran:

- Aclarar los hechos y establecer y reconocer la responsabilidad de las personas o los Estados ante las víctimas y sus familias.
- Determinar las medidas necesarias para impedir que se repitan estos actos.
- Facilitar el procesamiento y, cuando corresponda, el castigo mediante sanciones disciplinarias de las personas cuya responsabilidad se haya determinado en la investigación, y demostrar la necesidad de que el Estado ofrezca plena reparación, incluida una indemnización financiera justa y adecuada, así como los medios para obtener atención médica y rehabilitación.

En lo relativo a los procedimientos para la investigación de casos de tortura, estipula cómo debería ser la determinación del órgano investigador, directrices para entrevistar a la presunta víctima y testigos, el aseguramiento y la obtención de pruebas físicas, los indicios médicos y las fotografías. Particularmente, en el apartado de las consideraciones generales relativas a las entrevistas, el protocolo sugiere tener en cuenta una particular sensibilidad ante la presunta víctima. Deberán contar con un consentimiento informado donde se le explicará la importancia de su testimonio, aclarando qué parte del proceso será pública y cuál no. La información que deberá obtenerse de estas declaraciones versará sobre:

- Las circunstancias que condujeron a la tortura.
- Fecha y hora aproximada de la tortura, aclarando el último acto de tortura.
- Descripción detallada de quiénes intervinieron en el arresto, la detención y la tortura.
- Qué se le dijo o qué se le preguntó.
- Descripción de actividades cotidianas en el lugar de detención.
- Descripción de los hechos y métodos de tortura.
- Si sufrió agresión sexual en sentido amplio y no solo acceso.
- Descripción de armas u objetos utilizados.

En lo que refiere a los indicios médicos, el informe de los signos físicos y psicológicos deberá contener seis preguntas importantes:

1. ¿Hay una relación entre los signos físicos y psicológicos observados y la denuncia de tortura?
2. ¿Qué condiciones físicas contribuyen al cuadro clínico?
3. ¿Son los signos psicológicos observados los que cabe esperar o las reacciones típicas ante un estrés extremo dentro del contexto cultural y social del individuo?
4. Dado el curso fluctuante de los trastornos mentales postraumáticos a lo largo del tiempo, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde los actos de tortura? ¿En qué punto del proceso de recuperación se encuentra el sujeto?
5. ¿Qué otros factores de estrés afectan al individuo?
6. ¿El cuadro clínico hace pensar en una falsa denuncia de tortura?

Para garantizar una adecuada documentación de las pruebas, se puede contrastar con los testimonios de la víctima y los testigos; es crucial capturar imágenes lo antes posible, utilizando cualquier medio disponible, aunque solo sea una cámara sencilla, ya que los indicios pueden desvanecerse rápidamente. Además, es preferible el uso de equipos profesionales cuando sea posible, asegurando la correcta preservación de la cadena de custodia de todos los elementos fotográficos, incluidas películas, negativos e impresiones. Esto permitirá preservar la integridad de las pruebas y evitar cualquier manipulación futura.

## **V. GUÍA PARA USO DE LOS PROTOCOLOS DE ESTAMBUL Y DE MINNESOTA POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE ARGENTINA EN CASOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL CON RESULTADO DE LESIONES Y/O MUERTE DE INDIVIDUOS.<sup>8</sup>**

La Guía fue elaborada para sintetizar y facilitar la aplicación de los lineamientos de los Protocolos internacionales de Naciones Unidas sobre la investigación y documentación de la violencia institucional, especialmente en casos de tortura, malos tratos o muertes. Su objetivo es ofrecer una herramienta práctica al personal del Ministerio Público de la Defensa de Argentina, contribuyendo a una investigación efectiva que documente los hechos de manera precisa y garantice la sanción adecuada de los responsables. Al ser un documento elaborado por el Ministerio Público de la Defensa de Argentina, este instrumento suele aplicarse en el ámbito de dicho ministerio. La investigación de estos casos presenta desafíos específicos que requieren la aplicación

---

<sup>8</sup> Ministerio Público de la Defensa de Argentina. (2023). Guía para el uso de los Protocolos de Estambul y de Minnesota en casos de violencia institucional con resultado de lesiones y/o muerte de individuos. [https://www.mpd.gov.ar/pdf/publicaciones/Guia\\_Protocolos\\_Estambul%20y%20Minnesota%20Morris%20Tidbal%20Binz.pdf](https://www.mpd.gov.ar/pdf/publicaciones/Guia_Protocolos_Estambul%20y%20Minnesota%20Morris%20Tidbal%20Binz.pdf)

de buenas prácticas consensuadas internacionalmente, como los protocolos de Naciones Unidas, que aunque no son manuales operativos detallados, proporcionan marcos normativos y consideraciones prácticas esenciales para la investigación.

Para esta Guía, se considera violencia institucional toda violación de derechos cometida por funcionarios de fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios, el sistema judicial o efectores de salud, en contextos que restringen la autonomía o libertad de las personas, como detenciones, encierros o eventos en la vía pública. La evidencia muestra que la violencia institucional, en sus formas más extremas, como la tortura y las muertes ilícitas, es un problema que puede manifestarse incluso en Estados democráticos. Su erradicación y prevención requieren investigaciones exhaustivas que documenten los hechos de forma confiable y aseguren la sanción de los responsables.

La Guía tiene como fin resumir las recomendaciones de estos protocolos y ofrecer una herramienta útil para el personal del Ministerio Público de la Defensa de Argentina en la investigación y documentación de casos de violencia institucional, especialmente aquellos relacionados con tortura y muertes. Aunque está diseñada para este ministerio, también puede ser valiosa para otras agencias y profesionales involucrados en la prevención y erradicación de la violencia institucional.

El Estado y sus agentes, como jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, tienen la responsabilidad primordial de investigar los casos de tortura y muertes ilícitas. Sin embargo, la defensa pública desempeña un papel crucial en esta labor, gracias a su cercanía con las víctimas, la confidencialidad que garantiza y su independencia. Para asegurar el éxito de estas investigaciones, es fundamental la cooperación entre todas las agencias implicadas y la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, así

como de las propias víctimas, en un esfuerzo conjunto por erradicar este tipo de violencia.

## VI. RESOLUCIÓN 477/2023 DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN

Por último, pero no menos relevante, quisiera mencionar brevemente otro esfuerzo para combatir la violencia institucional y sugerir su implementación. En 2023, el entonces Ministro de Seguridad, Cdor. Ab. Aníbal Fernández, decidió mediante la Resolución 477/2023<sup>9</sup> la prohibición por parte de las Direcciones de Asuntos Jurídicos y/o Divisiones Legales de asistir jurídicamente a los agentes y/o funcionario de fuerzas federales que resulten judicialmente acusados por graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, esta resolución estuvo vigente solo 8 meses, ya que fue derogada en marzo del 2024 por la actual ministra de la cartera, Dra. Patricia Bullrich mediante Resolución 159/2024. La decisión adoptada por Fernández significó un gran avance en materia de derechos humanos que entiendo debe ser imitada por el resto de las jurisdicciones a los fines de concientizar a los miembros de las fuerzas de seguridad y que sepan que no todas sus acciones van a estar amparadas por el órgano ministerial al que pertenecen.

---

<sup>9</sup> La decisión del Ministerio de Seguridad surge de un compromiso que el Estado argentino adquirió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la familia de Ricardo Javier Kaplun, quien falleció en 2000 durante una detención arbitraria. Para mayor información sobre el contexto y la fundamentación de la Resolución 477/23 ver **Comisión Interamericana de Derechos Humanos**. (2015). *Caso 12.854: Ricardo Javier Kaplun y familia*. <https://www.cidh.oas.org> y consultar Bertoia, L. (2023, 10 de octubre). Para que las fuerzas de seguridad no defiendan a quienes violan los derechos humanos. *Página/12*. <https://www.pagina12.com.ar/570284-para-que-las-fuerzas-de-seguridad-no-defiendan-a-quienes-vio>



## VII. CONCLUSIONES

Así las cosas, tras un repaso por las distintas perspectivas sobre la violencia institucional como aproximación al objeto de estudio que aquí nos propusimos presentar—los Protocolos de Estambul y Minnesota—y después de analizar brevemente ambas herramientas, podemos advertir que en la Provincia de Buenos Aires no existe una guía que formalice su aplicación en casos de grave vulneración de derechos humanos. Aunque desde 2019 la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la PBA, cuenta con una Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional, que ha permitido la implementación de varias herramientas para concientizar, combatir y erradicar este tipo de violencia, aún no disponemos de una guía que estandarice y ordene estos esfuerzos.

Entendemos que la elaboración de dicha guía será de gran utilidad no solo para los agentes judiciales, especialmente aquellos responsables de la instrucción, sino también para los abogados y abogadas que deseen constituirse como particulares damnificados en casos que involucren los delitos mencionados anteriormente. La formación continua, incluida en la obligación de promover la creación de institutos para la formación de los abogados en nuevas especialidades y su perfeccionamiento en el conocimiento del derecho (Ley 5.177), nos obliga a enfrentar estos desafíos con más y mejores capacitaciones. Somos abogados y abogadas de la democracia, y combatir este tipo de crímenes debería convertirse en un imperativo para quienes consideramos que la defensa de los derechos humanos hoy en día se manifiesta en la lucha contra estas violencias.

En síntesis, contar con una guía formal para la aplicación de los Protocolos de Estambul y Minnesota permitiría estandarizar las respuestas del sistema de justicia ante los casos de violencia institucional, asegurando una correcta documentación y facilitando la rendición de cuentas de los responsables. Además, ofrecería un marco común para la actuación de los profesionales de diversas disciplinas implicados en la investigación de estos casos.

Para garantizar la defensa de los derechos humanos en nuestra provincia desde nuestra labor como jóvenes abogados es que propongo:

**a. Votación de la Guía**

Se propone la votación para la formalización de una **Guía Provincial** que adapte los principios y directrices de los Protocolos de Estambul y Minnesota al contexto local. Esto permitiría asegurar que las investigaciones sobre violencia institucional sigan un estándar uniforme en la Provincia de Buenos Aires y sistematizar las buenas prácticas en un único documento.

**b. Votación para la formación en materia de violencia institucional de abogados y abogadas en la Provincia de Buenos Aires**

Dado que la correcta implementación de estos protocolos requiere una capacitación adecuada, se propone una formación opcional específica en materia de violencia institucional dirigida a los abogados y abogadas de la Provincia de Buenos Aires. Este programa formativo debería incluir tanto los aspectos técnicos como los principios éticos y de derechos humanos que sustentan los protocolos y las buenas prácticas, además de las correspondientes técnicas de litigación.

**c. Votación sobre la Resolución de Seguridad 477/2023**

Finalmente, se propone instar al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a adoptar los lineamientos propuestos por la solución amistosa Caso 12.854: *Ricardo Javier Kaplun y familia* **imitando la Resolución 477/2023**. Esta resolución igualaría las armas en el pleito judicial entre la supuesta víctima y los eventuales criminales.

## VIII. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- I. **Tiscornia, S.** (2022). La violencia institucional como tema de trabajo e investigación. En Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (Ed.), Repertorios: perspectivas y debate en clave de Derechos Humanos: 2- violencia institucional (pp. X-X). Buenos Aires, Argentina: Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
- II. **Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.** (s.f.). Los derechos humanos frente a la violencia institucional. Buenos Aires, Argentina: Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Recuperado de [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual\\_ddhh.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_ddhh.pdf)
- III. **Ministerio Público Fiscal de la Nación.** (2013). Resolución PGN 455/13. Buenos Aires, Argentina: Procuración General de la Nación. Recuperado de <https://www.mpf.gob.ar>
- IV. **Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.** (2021). Resolución FG 33/21. Buenos Aires, Argentina: Procuración General de la Nación. Recuperado de <https://www.fiscalias.gob.ar>
- V. **Rafecas, D.** (2016). *El crimen de tortura: en el Estado autoritario y en el Estado de derecho*. Ediciones Didot